

**LEY DE PROCEDIMIENTO DEL
TRABAJO**

**TITULO I
DE LA ORGANIACION DE LA JUDICATURA DEL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL**

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1. La administración de justicia en materias del trabajo, seguridad social, y vivienda de interés social se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social y los Juzgados de la materia.

Artículo 2. La Judicatura del Trabajo y Seguridad Social forma parte del Poder Judicial y tiene la competencia establecida en el Título II de esta Ley.

Artículo 3. La judicatura del trabajo tiene competencia para decidir las controversias emergentes de los contratos individual y colectivo de trabajo; de la aplicación de las leyes de Seguridad Social, Vivienda de interés social, en los casos determinados por el Código de Seguridad Social; denuncias por infracción de Leyes sociales; recuperación del patrimonio de las organizaciones sindicales y otras materias señaladas expresamente por ley.

Artículo 4. La incompatibilidad prevista en el Art. 5° de la Ley de Organización Judicial alcanza, en materia laboral, también a las funciones de dirección o representación en las organizaciones de trabajadores y empleadores.

Artículo 5. El personal de la judicatura del trabajo queda incorporado a la carrera y escalafón judiciales.

**CAPITULO II
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Artículo 6. La Corte Suprema de Justicia conocerá las causas de responsabilidad de los vocales de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social y, en su Sala Social, los recursos de casación y otros que se interpongan de acuerdo con este procedimiento.

**CAPITULO III
DE LA CORTE NACIONAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

Artículo 7. La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social tiene su sede en la ciudad de La Paz, con jurisdicción en todo el territorio de la República y está constituida por un Presidente y seis vocales, organizados en dos salas, una presidida por el Presidente de la Corte y otra por el vocal más antiguo.

Artículo 8. Para ejercer el cargo de vocal de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social se requieren los mismos requisitos exigidos por el Art. 92° de la Ley de Organización Judicial, y tener conversación en las materias de su competencia.

Artículo 9. Son atribuciones administrativas de la Sala Plena de la Corte:

- a) Dirigir y representar a la Judicatura del Trabajo y Seguridad Social;
- b) Proponer ternas a la Corte Suprema de Justicia para la elección de Jueces del Trabajo y Seguridad Social;
- c) Aprobar el presupuesto anual del ramo, a propuesta de su Presidente;
- d) Designar anualmente a los conjuces;
- e) Solicitar a la Corte Suprema la creación de nuevos juzgados;
- f) Designar al Secretario de Cámara y empleados dependiente de la Corte. El Secretario de Cámara deberá reunir los mismos requisitos establecidos por la Ley de Organización Judicial, para ser Secretario de Cámara de las Cortes de Distrito.
- g) Designar a los empleados de los juzgados a propuesta en terna de los respectivos jueces, seleccionando estudiantes de Derecho para los cargos previstos en el Art. 163° de la Ley de Organización Judicial.
- h) Designar anualmente a un Vocal para la inspección de los juzgados;
- i) Aprobar el Reglamento de la Corte y Juzgados, y vigilar su correcto funcionamiento.

Artículo 10. La Corte inaugurará sus labores el 2 de enero de cada año, oportunidad en la cual el Presidente hará conocer su informe anual y ministrará posesión a los conjuces elegidos en la última reunión del año anterior.

Artículo 11. El Presidente de la Corte será elegido en la primera reunión de Sala Plena, por voto secreto y mayoría absoluta, teniendo en cuenta su antigüedad en la magistratura del trabajo y estudios de especialización, trabajos realizados, ejercicio profesional o cátedra universitaria en la especialidad.

Sus atribuciones son las siguientes:

- a) Representar a la judicatura laboral y presidir las actuaciones del Tribunal;
- b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Sala Plena;
- c) Velar por la correcta y pronta administración de justicia en la Corte y Juzgados del Trabajo, aplicando en su caso las medidas disciplinarias correspondientes;
- d) Oír las quejas de los abogados y litigantes contra los vocales, jueces y empleados judiciales y hacerlas conocer a la Sala Plena.
- e) Conceder licencia de uno a quince días a los Vocales, jueces y empleados dependientes de la Corte y Juzgados;
- f) Recibir el juramento de los Vocales y conjuces de la Corte;
- g) Dirigir la correspondencia y rubricar las cartas acordadas, provisiones y otros libramientos de la Corte;

h) Presidir la Sala Plena y la Sala a que se refiere el Art. 7°.

Artículo 12. Las Salas de la Corte de Trabajo y Seguridad Social conocerán indistintamente cualquiera de estas materias.

Artículo 13. Los Vocales asistirán a su despacho todos los días hábiles, de lunes a viernes.

Artículo 14. Los Vocales titulares de la Corte, ausentes o impedidos serán suplidos por los otros vocales o por los conjueces.

Si el impedimento alcanza a todos los vocales y conjueces de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social, se procederá conforme a los Arts. 82° y 83° de la Ley de Organización Judicial.

CAPITULO V

DE LOS JUGADOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 15. Los jueces del Trabajo y Seguridad Social tiene jerarquía de Jueces de Partido; serán designados por la Corte Suprema de Justicia, a proposición en terna de la Corte del Trabajo y durarán cuatro años en sus funciones.

Artículo 16. Para ser Juez del Trabajo y Seguridad Social se requieren los mismos requisitos exigidos por la Ley de Organización Judicial para los jueces de Partido, además de tener versación en la materia de su competencia.

Artículo 17. En la tramitación de los juicios sociales, en caso de impedimento o acefalía del Juez de Trabajo corresponde la suplencia al Juez de Trabajo de la misma localidad o, en su defecto, al Juez de Partido de turno en lo Civil.

CAPITULO IV

DEL MINISTERIO PUBLICO

Artículo 18. El Ministerio Público estará representado por un fiscal que, con carácter exclusivo y permanente, dictamine para sentencia solamente en los siguientes casos:

- a) Cuando se trate de intereses de menores o interdictos y no intervengan sus padres, tutores o autoridades del menor;
- b) Cuando el demandado sea el Estado en sus Ministerios o Prefecturas.

Artículo 19. No habrá intervención del Ministerio Público, en primera ni en segunda instancia, en los juicios sociales seguidos contra instituciones y entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 20. En las oficinas de la Judicatura Laboral no se podrá recibir depósitos de dinero, bienes o valores, y ninguno de sus funcionarios será depositario.

Todo depósito de dinero deberá efectuarse en el Banco del Estado, con responsabilidad del empleado infractor.

TITULO II

DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA

CAPITULO UNICO

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Artículo 21. La jurisdicción de los Jueces del Trabajo y Seguridad Social se determina a elección del demandante:

- a) Por el lugar de la celebración del contrato;
- b) Por el lugar de la prestación del servicio;
- c) Por el domicilio del demandado.

Artículo 22. Los Jueces de Trabajo y Seguridad Social, tienen competencia para conocer en primera instancia:

- a) Las medidas preparatorias y precautorias previstas en esta Ley;
- b) Las acciones emergentes del contrato o de la relación individual de trabajo;
- c) Las denuncias por infracción de Ley social;
- d) Los juicios coactivos previstos en las disposiciones legales de Seguridad Social y Vivienda;
- e) Los juicios coactivos para recuperación del patrimonio sindical;
- f) Las demandas de desafuero de dirigentes sindicales;
- g) Las causas en las cuales tenía competencia por determinación de la ley.

Artículo 23. La Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social en Sala Plena, tienen competencia para:

- a) Conocer las recusaciones interpuestas contra sus vocales y conjuces y, en única instancia, las interpuestas contra los Jueces del Trabajo;
- b) Dirimir las competencias que se susciten entre los jueces del Trabajo y entre éstos y otros jueces o autoridades, departamentales y municipales en materias del trabajo y seguridad social;
- c) Conocer los recursos de quejas interpuestas contra los Vocales y Jueces;

- d) Resolver las consultas que sobre interpretación y aplicación de las leyes en materia de Seguridad Social le sean formuladas por los Jueces y por la Dirección General de Seguridad Social y entidades gestoras de Seguridad Social.
- e) Instaurar sumarios disciplinarios contra los empleados por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y remover a los culpables, sin perjuicio de la acción penal a la que hubiere lugar y resolver las quejas que haga conocer el Presidente de la Corte.

Artículo 24. Las Salas de la Corte Nacional del Trabajo y Seguridad Social tienen competencia para conocer:

- a) Las apelaciones de las sentencias y autos pronunciados en primera instancia por los jueces, en las materias de su competencia;
- b) Las compulsas y demás recursos ordinarios previstos en el Código de Procedimiento Civil;
- c) Las excusas y recusaciones interpuestas contra los jueces y las excusas de sus propios vocales;
- d) El juzgamiento administrativo de presidentes, directores y gerentes de las Cajas y Fondos Complementarios, en los casos previstos en el Art. 607° del Reglamento del Código de Seguridad Social.
- e) En grado de apelación, las resoluciones pronunciadas por los Consejos Ejecutivos u organismos similares de las Cajas de Seguridad y Fondos Complementarios sobre concesión de rentas;

Artículo 25. En única instancia las Salas de la Corte también tienen competencia para conocer las cuestiones que se susciten en la aplicación de las disposiciones legales sobre asignaciones familiares, vivienda de interés social y rehabilitación, conforme al Art. 226° del Código de Seguridad Social.

Artículo 26. La Sala Social de la Corte Suprema de Justicia, tiene competencia para conocer los recursos de casación deducidos contra los autos de vista pronunciados por la Corte Nacional del Trabajo y, en general, los que se interpongan ante este Tribunal conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el Código de Procedimiento Civil.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 27. Conforme a lo previsto en el Capítulo I del Título XV de la Ley de Organización Judicial y en el Art. 2° del Código de Procedimiento Civil, los Jueces y

Tribunales del Trabajo impulsarán los procedimientos sociales, La dirección e impulsos procesales corresponden a los jueces y la celeridad en los trámites es obligación de magistrados, jueces, fiscales dependientes, quienes cuidarán de su rápida tramitación.

La dirección, impulso y celeridad procesales se realizarán sin perjuicio del derecho de defensa de las partes.

Artículo 28. No se admite la reconvencción en los juicios a los que se refiere la presente Ley.

Artículo 29. En el juicio social seguido por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente.

Artículo 30. En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción de litis pendencia.

Las causas de despido que den lugar a la acción penal solamente podrán ser conocidas en la vía ordinaria como cuestiones prejudiciales y, en ningún caso, se aplicará la disposición contenida en el último párrafo del art. 175° del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 31. Toda persona afectada en sus derechos como consecuencia de la relación individual de trabajo podrá ocurrir ante la judicatura laboral. Los trabajadores de ambos sexos, desde los 18 años cumplidos, tienen plena capacidad para actuar por sí. Los menores de dicha edad y los interdictos actuarán representados por sus tutores legales o ad-litem o por las autoridades del menor que sean competentes.

CAPITULO II

MEDIDAS PREPARATORIAS Y PRECAUTORIAS

Artículo 32. El juicio social podrá prepararse o proseguirse con las siguientes medidas preparatorias o precautorias que se solicitarán al Juez con fundamento:

- a) Cuando se tenga temor de alejamiento o huída del demandado, se podrá pedir su arraigo hasta que constituya suficiente garantía;
- b) En los casos señalados en el Código de Procedimiento Civil que sean aplicables al juicio social.

Artículo 33. Para que proceda el secuestro deberá precisarse la cuantía reclamada y esta medida preparatoria se aplicará solamente por dicho monto.

El secuestro, embargo e intervención no causarán el cese de actividades de la empresa o establecimiento de trabajo ni perjudicarán el normal desarrollo de sus actividades.

Artículo 34. Las medidas preparatorias y precautorias podrán ser sustituidas en cualquier momento, cuando se constituya suficiente garantía.

CAPITULO III

DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

Artículo 35. El Juez imprimirá a la petición el trámite que legalmente le corresponda aún cuando lo pedido por la parte estuviera equivocado. Se salva el derecho que tienen los litigantes para ejercitar los recursos señalados por ley.

Artículo 36. Cuando tenga que practicarse alguna diligencia de notificación fuera del territorio de la República se estará a lo dispuesto por el Art. 123° del Código del Procedimiento Civil.

Artículo 37. La citación será personal, con la providencia que admite la demanda y en los casos previstos por el Código del Procedimiento Civil.

Tratándose de personas jurídicas esta notificación se efectuará válida e indistintamente a sus presidentes, gerentes generales o personeros legales. Asimismo, podrán ser citados válidamente los agentes o administradores, regionales o locales, de las oficinas donde hubieran sido contratados los demandantes.

Cuando la notificación deba efectuarse a los Ministerios, Prefecturas, Municipalidades y demás personas jurídicas de derecho público se la practicará a los funcionarios que legalmente las representan. Ante la imposibilidad de notificar a dichos representantes legales, a sólo representación escrita del diligenciero y después de la primera vez se efectuará la notificación al Fiscal de Distrito, para que la haga conocer al demandado bajo responsabilidad.

Artículo 38. En aquellas diligencias en las que debe practicarse la notificación en domicilio, éste deberá ser señalado por las partes a una distancia no mayor de 10 cuadras a la redonda del juzgado; caso contrario, el Juez señalará domicilio en estrados.

Artículo 39. Las providencias de sustanciación, necesariamente serán dictadas dentro de las 24 horas de la presentación de los escritos; los autos interlocutorios dentro del plazo de 5 a 8 días, conforme el Art. 203 del Código del Procedimiento Civil y, las sentencias, en el plazo máximo de 20 días.

**CAPITULO IV
DE LA DEMANDA**

Artículo 40. Las demandas sociales se presentarán por escrito ante el juez competente y en ellas se podrá reclamar el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de las obligaciones sociales emergentes de la ley y del contrato o relación individual de trabajo.

Artículo 41. La demanda será interpuesta personalmente por el trabajador o mediante apoderado, en forma individual o colectiva. La demanda colectiva sera incoada,

necesariamente, mediante un solo apoderado y admitida siempre que la cosa demandada sea la misma y afecte simultáneamente a los demandantes y demandados.

CAPITULO V DE LAS EXCEPCIONES

Artículo 42. En el procedimiento social sólo se admiten las siguientes excepciones:

a) Previas, o sea: incompetencia, impersonería, conexitud de causas e imprecisión o contradicción en la demanda;

b) Perentorias, o sea: pago, prescripción y cosa juzgada.

Artículo 43. Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar la demanda acompañando prueba preconstituida.

Artículo 44. Para resolver las excepciones previas el juez dentro de tercero día dictará auto motivado. Contra esta resolución se podrá apelar en el término de tres días y el juez concederá el recurso en el efecto devolutivo.

Artículo 45. Cuando se declaren probadas las excepciones previas, se aplicarán las siguientes normas:

- a) En la falta de competencia, el juez se inhibirá del conocimiento de la causa remitiendo el proceso al Juez competente;
- b) En la falta de personería del de mandado el juez ordenará nueva citación con la demanda a quien corresponda. En la falta de personería del demandante, se ordenará la suspensión del proceso hasta que se subsane el vicio impugnado;
- c) En la conexitud de causas, el juez ordenará la remisión de obrados sólo cuando el juicio anterior haya sido iniciado en otro juzgado de trabajo;
- d) En la ambigüedad de la demanda el juez ordenará la suspensión del procedimiento hasta que el demandante aclare su demanda.

Artículo 46. Las excepciones perentorias serán resueltas juntamente con la causa principal y podrán oponerse en cualquier estado del juicio, aún en ejecución de sentencia.

CAPITULO VI DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA

Artículo 47. Si el demandado contesta afirmativamente todos los puntos de la demanda se tendrá por confesa a la parte y el juez, sin más trámite, pronunciará sentencia declarándola probada. Si confiesa en parte, sólo en esta se tendrá por probada, debiendo seguir el proceso sobre los demás puntos demandados.

Artículo 48. Si el demandado no responde a la demanda en el término de cinco días hábiles, el juez lo declarará rebelde y sujetará la causa a prueba.

Artículo 49. El demandado declarado rebelde podrá asumir defensa en cualquier tiempo en el estado en que encuentre el proceso, previo pago de la multa prevista por Ley.

CAPITULO VII DE LA PRUEBA

Artículo 50. Cuando el demandado ha contestado negativamente la demanda, el juez abrirá el término de prueba de quince días comunes y perentorios.

Artículo 51. Durante el término probatorio se admitirán todos los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil, debiendo el Juez orientar de oficio el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Vencido dicho término y aún en segunda instancia, se aceptarán únicamente pruebas documentales o literales, sin necesidad de juramento de reciente obtención y a su sólo presentación.

Artículo 52. En materia social constituyen prueba literal los documentos oficiales del empleador emergentes de la relación de trabajo, como son los contratos de trabajo, finiquitos, planillas, sobre de pago, certificados de trabajo, balances, estados financieros, registros personales de los trabajadores, tarjetas, libros de asistencia, certificados médicos y otros de índole similar.

Dichos documentos oficiales no requieren de formalidades como el reconocimiento de la firma y rúbrica ni la ratificación dentro del término probatorio.

Artículo 53. Cuando una parte se niegue a presentar algún documento solicitado por la otra, el juez la conminará a exhibirlo salvo que proteja las actividades de las partes, como son: los secretos industriales, comerciales, profesionales o los documentos personalísimos del trabajador.

Artículo 54. Los documentos otorgados en el extranjero tendrán fuerza probatoria siempre que hubieran sido legalizados.

Artículo 55. Tienen validez probatoria las declaraciones de dos o más testigos que concuerden en personas, cosas, hechos, tiempo y lugares. Cuando éstos sean trabajadores sus empleadores estarán a lo dispuesto en el Art. 454 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 56. En materia social solamente podrán ser testigos las personas de ambos sexos mayores de 15 años. Los menores de esta edad, hasta los 10 años, rendirán testimonios con carácter informativo.

Artículo 57. En los juicios sociales no es admisible la tacha contra el dependiente de la parte que presente el testigo, a que se refiere el caso 2º del Art. 446 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 58. A la audiencia de recepción de prueba testifical podrán concurrir las partes asistidas por sus abogados para interrogar al testigo por intermedio del juez, todo lo cual se hará constar en el acta respectiva.

Artículo 59. Concluída la declaración será leída al testigo quien podrá hacer las modificaciones y aclaraciones que estime necesarias, lo cual se expresará con toda claridad en la misma acta.

Artículo 60. Los testigos que no sepan escribir estamparán sus impresiones dígito-pulgares. De este hecho Se dejará constancia en acta.

Artículo 61. Los testigos no están obligados a declarar sobre aquello que conozcan por razón de su Ministerio o profesión, como ser:

- a) Los ministros de cualquier culto religioso;
- b) Los profesionales obligados legalmente a guardar el secreto profesional;
- c) Cualquier otra persona que por disposición de la ley deba guardar secreto.

Artículo 62. La confesión en materia laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere más prueba.

Artículo 63. En los juicios del trabajo sólo se admitirá la confesión judicial provocada, o juramento de posiciones, que deberá ser solicitado y absuelto dentro del término probatorio.

Artículo 64. Si el emplazado no comparece ante el juez, éste en rebeldía, dará por averiguados los puntos propuestos en el interrogatorio.

Artículo 65. A solicitud de parte o de oficio los jueces señalarán fecha y hora para el cumplimiento de inspección o reconocimiento judicial que podrá realizarse en primera o segunda instancia.

Artículo 66. La parte que solicite la inspección o el Juez que le disponga de oficio señalaran la materia u objeto de su realización.

Artículo 67. Si la inspección no se efectúa por acto deliberado de la parte contra quien debe realizarse, el juez inferirá indicios contra el renuente.

Artículo 68. Para apreciar hechos de carácter científico, técnico o práctico, en primera o segunda instancia, el juez podrá recurrir a peritos aunque no lo pidan las partes.

El Juez podrá apartarse del criterio de los peritos.

Artículo 69. Los informes periciales deberán presentarse en el plazo máximo de cinco días, computables desde la fecha de juramento del perito.

Artículo 70. Si los informes periciales no concuerdan el Juez designará de oficio un dirimidor.

Artículo 71. En las controversias sobre riesgos del trabajo actuarán pericialmente el Instituto de Salud Ocupacional y las respectivas juntas médicas.

Artículo 72. La presunción legal que no admite prueba contraria forma plena prueba y exime de toda otra y la presunción judicial admite prueba en contrario.

Artículo 73. La omisión del reconocimiento médico preocupacional hará presumir la inexistencia del riesgo antes de la contratación del trabajador, salvo prueba en contrario. De la misma manera, la falta de balance legal del empleador que tiene la obligación de presentarlo, hará presumir que ha obtenido utilidades.

Artículo 74. Los indicios constituyen prueba sólo cuando por su importancia, número y conexión con el hecho que se trata de esclarecer producen convicción en el juez.

Artículo 75. El juez apreciará los indicios en conjunto, en la forma establecida en el artículo anterior.

Artículo 76. La prueba indiciaria será considerada por los jueces de instancia, solamente a falta de otra probatoria.

Artículo 77. La declaración de un sólo testigo, relacionada con otros medios de prueba, podrá merecer fe probatoria indiciaria.

CAPITULO VIII DE LA SENTENCIA

Artículo 78. El juez pronunciará sentencia sin más trámite al vencimiento del término de prueba, dentro del plazo establecido en el Artículo 39.

La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados. Comprenderá también aquello que el trabajador hubiese omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera evidenciado y tenga conexitud.

Artículo 79. En las sentencias los jueces determinarán, obligatoria e inexcusablemente, la cuantía de las obligaciones que debe pagar el demandado.

Artículo 80. La sentencia será notificada primero a la parte afectada por el fallo, para que en los términos legales, pueda hacer uso de los recursos que le franquea la ley.

Artículo 81. Cuando la sentencia sancione con costas al demandado, el honorario profesional será regulado en la proporción del 10% del monto condenado y, en una suma equitativa, cuando se trate de autos interlocutorios. Dichos honorarios corresponden al abogado del demandante.

**CAPITULO IX
DE LOS RECURSOS ORDINARIOS**

Artículo 82. Notificadas las partes con la sentencia, tienen el término perentorio de cinco días para interponer recursos de apelación fundamentada, del que se correrá traslado, y de tres tratándose de autos interlocutorios. Vencidos estos términos, los recursos serán rechazados.

Artículo 83. La apelación de la sentencia en el juicio social será concedida en el efecto suspensivo.

Artículo 84. Recibido el expediente por el superior éste actuará conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, reduciendo el término probatorio, si procede, a siete días.

Artículo 85. La Corte Nacional del Trabajo dictará auto de vista en el término de 10 días de sorteado el expediente, y de 5 en los autos interlocutorios.

**CAPITULO X
DEL RECURSO DE CASACION**

Artículo 86. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte Nacional del Trabajo en el término fatal de ocho días, computables desde su notificación al recurrente con el auto de vista, acompañando depósito judicial por el condenatorio y demás depósitos exigidos por ley.

Artículo 87. Si el recurrente no acompaña el certificado de depósito por el monto condenatorio o el recurso es presentado fuera del término, la Corte sin más trámite, rechazará el recurso declarando ejecutoriado el auto de vista.

Artículo 88. Cuando el recurrente no provea el porte para la remisión del expediente al Tribunal de notificación con el auto que lo concede se declarará desierto el recurso y ejecutoriado el auto de vista.

**CAPITULO XI
DE LAS EJECUCIONES DE LAS
SENTENCIAS**

Artículo 89. Las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir por el juez de primera instancia, que concederá a la parte perdedora un plazo de tres días para el efecto.

Artículo 90. Si como consecuencia de los recursos interpuestos la sentencia ejecutoriada establece el pago de una suma determinada, quedando pendiente otra indeterminada, se hará efectiva la primera sin perjuicio de que se establezca con carácter inmediato el monto de la segunda.

Artículo 91. La cuantía de la obligación establecida en sentencia se pagará preferentemente al trabajador o a sus herederos, en forma personal.

Artículo 92. Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia el litigante perdidoso no cumple su obligación, el juez librará mandamiento de embargo contra los bienes de aquél y sólo en caso de no haber bienes embargables o de no ser suficientes, ordenará el apremio del ejecutado.

Artículo 93. La Corte Nacional del Trabajo podrá ejecutar provisionalmente sus autos de vista siempre que sean conformatorios de las sentencias de primer grado, para lo cual el interesado ofrecerá fianza de resultas cuando el monto condenatorio alcance a la suma de veinte mil pesos bolivianos, y garantía real si pasa de dicha cantidad.

CAPITULO XII DE LA TERCERA

Artículo 94. En los juicios sociales sólo será admisible la tercería de dominio excluyendo sobre el bien embargado que deberá interponerse inexcusablemente acompañada de instrumento que acrediten el derecho de propiedad del tercerista, debidamente registrados.

Artículo 95. Si el bien embargado es mueble, el tercerista deberá demostrar su derecho de propiedad por todos los medios de prueba preconstituída.

TITULO IV DE LOS DOCUMENTOS ESPECIALES

CAPITULO I DEL PROCEDIMIENTO POR INFRACCION DE LEY SOCIAL

Artículo 96. La denuncia por infracción de ley social procede en aquellos casos en los cuales la infracción es manifiesta y prueba ser demostrada con prueba preconstituída. No procede en los casos de interpretación legal o contractual o tratándose del esclarecimiento de hechos controvertidos.

Artículo 97. Cuando se constata la infracción de leyes sociales, el Director General del Trabajo en La Paz, y los Directores Departamentales, Jefes Departamentales o Regionales en el interior presentarán denuncia escrita ante el Juez de Trabajo de su distrito, especificando el nombre del infractor, su domicilio y el lugar de trabajo donde se ha cometido la infracción, señalando las disposiciones infringidas con relación circunstanciada de los hechos y proponiendo el monto de la multa a aplicarse.

El Director General, los Directores Departamentales y los Jefes Departamentales o Regionales, bajo responsabilidad, llevarán registros y control de las denuncias que tienen valor de prueba preconstituída.

Artículo 98. Admitida la denuncia, el Juez de Trabajo ordenará la citación al denunciado simultáneamente con la apertura del término de prueba, para que en el término perentorio de quince días ofrezca los justificativos que puedan desvirtuarla.

Artículo 99. Es obligatoria la concurrencia de la autoridad denunciante en el trámite de la causa. La autoridad denunciante no podrá desistir ni transigir y el Juez no admitirá tercerías coadyuvantes o adhesiones a la denuncia.

Artículo 100. Vencido el término de prueba, el Juez dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 101. Cuando el Juez declare probada la denuncia impondrá al infractor la sanción pecuniaria que corresponda, de acuerdo con la gravedad de la infracción y la capacidad económica del empleador ordenando, al mismo tiempo, el cumplimiento de las disposiciones infringidas. Si la declara improbada y no ha sido interpuesto el recurso de apelación el Juez, de oficio y con carácter inmediato, elevará obrados en revisión a la Corte Nacional del Trabajo.

Artículo 102. La sentencia se notificará a las partes para que puedan hacer uso del recurso de apelación ante la Corte Nacional del Trabajo, en el término perentorio de cinco días.

La apelación interpuesta deberán ser fundamentada.

Artículo 103. El denunciado, para apelar, deberá acompañar certificado de depósito judicial a la orden del Juez del Trabajo, por el 50% de la multa impuesta, caso contrario se rechazará su apelación quedando ejecutoriada la sentencia.

Artículo 104. Radicada la causa en la Corte Nacional del Trabajo se ordenará la entrega inmediata del expediente el vocal de turno quien, en el término de diez días, propondrá el respectivo auto de vista que deberá ser considerado de inmediato, sin perjuicio del apersonamiento de las partes.

Artículo 105. Las partes podrán hacer uso del recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Si el recurrente es el denunciado deberá acompañar depósito bancario por el 50% de la multa, a la orden de la Corte Nacional del Trabajo, además del previsto con el artículo 103 de esta ley, caso contrario y sin más trámite rechazará el recurso, declarando ejecutoriado el auto de vista.

Artículo 106. La obligación condenatoria será pagada por el denunciado dentro del tercer día de su notificación con el fallo ejecutoriado, bajo conminatoria de embargo o apremio del juez de primera instancia.

CAPITULO II

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE RECUPERACION DEL PATRIMONIO

SINDICAL

Artículo 107. Los juicios coactivos de seguridad social y vivienda de interés social, se registrarán por las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 108. El Ministerio de Trabajo tiene competencia para girar notas de cargo con el objeto de recuperar el patrimonio sindical, mediante juicio coactivo. Estos trámites se sujetarán al mismo procedimiento previsto en el artículo anterior.

**TITULO V
DISPOSICIONES FINALES
TRANSITORIOS**

**CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES FINALES**

Artículo 109. La presente Ley regirá desde el 6 de agosto de 1977.

Artículo 110. Los aspectos no previstos en la presente Ley se registrarán por las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil.

Artículo 111. Quedan abrogadas todas las disposiciones legales contrarias a esta Ley.

